

Castro, siete de agosto de dos mil veinte.

VISTOS, OIDOS Y CONSIDERANDO:

PRIMERO: Que ante este Tribunal de Letras del Trabajo de Castro, se ha dado inicio a la causa **RIT O-56-2020 RUC 20-4-0270694-6**, procedimiento de aplicación general, y comparece doña **DENISSE LISETTE MUÑOZ AQUINTUI**, profesora, domiciliada en Castro, calle Gamboa Alto S/N, quien viene en deducir demanda de indemnización de Daños, en contra de mi ex empleador **CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE DE DALCAHUE**, persona jurídica de derecho público, representada legalmente por don Juan Hijerra Seron, Alcalde, ambos domiciliados en Avenida Mocopulli 75, Comuna de Dalcahue; en base a los antecedentes de hecho y de derecho. Indica en su demanda que suscribió contrato de trabajo docente de aula, el 03 de Marzo de 2016; dicha contratación fue renovada de forma sistemática y sucesiva, siendo mi última contratación de fecha 01 de Marzo de 2019. El día 28 de Noviembre de 2019, se me notificó el término de mi contrato, ello en conformidad a lo establecido en el Artículo 72 letra d, “Por término del período por el cual se efectuó el contrato”, del Estatuto Docente, Ley No. 19.070, esto es “la llegada del plazo de la contrata”, sin mayor justificación. Señala que en cuanto a la confianza legítima se ha establecido básicamente que cuando existen dos renovaciones en un trabajador, se entiende que en él tiene el derecho u opera la confianza legítima de ser contratado nuevamente por un período similar al que tenía. Entonces, su no renovación o su renovación parcial requieren desde entonces que (1) sea avisada con a lo menos 30 días de anticipación y (2) que dicha no renovación sea fundamentada más allá del simple “cumplimiento del plazo” .

En este sentido el Dictamen 85700 de Contraloría ha establecido que: “Por ello, concluye que teniendo en cuenta que las reiteradas renovaciones de las contrataciones - desde la segunda renovación al menos-, generan en los servidores municipales que se desempeñan sujetos a esa modalidad, la confianza legítima de que • tal práctica será reiterada en el futuro. De este modo, para adoptar una determinación diversa, es menester que la autoridad municipal emita un acto administrativo que explice los fundamentos que motiven tal decisión.” . En cuanto al requisito de fundamentación o de Motivación que debe tener el acto por el cual se notifica la no renovación, establece que: “El artículo 11 de la ley N° 19.880,



dispone, en lo que interesa, que: Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio” . El Dictamen 85700 de la Contraloría General de la República es claro a este respecto señalando que: “En caso de no dictarse el acto administrativo que fundamente la no renovación o prórroga de la contrata, o en el evento que se resuelva disponer la renovación pero en un grado o estamento inferior o por un plazo menor a una anualidad, o que no se encuentren debidamente fundadas esas decisiones, y el afectado reclamé oportunamente, corresponde entender que la contratación del servidor debe ser prorrogada en iguales términos a la existente al 31 de diciembre de la anualidad respectiva, y por todo el año siguiente.” . En el caso de esta compareciente, en concreto, debe entenderse prorrogado el contrato hasta el 31 de diciembre de 2020, y siendo mi remuneración mensual la suma de \$1.319.805.-, el lucro cesante asciende a la suma de \$15.837.660.-, lo que pide sea indemnizado, más las costas que irrogue el juicio a esta parte, con reajustes e intereses.

SEGUNDO: Que la demandada interpone como excepción de previo y especial pronunciamiento la Incompetencia Absoluta de este Tribunal, en atención a que el Estatuto Docente, regula en lo pertinente, la relación laboral, carrera funcionaria, deberes y derechos del respectivo personal que ejecute acciones de atención primaria de salud, como es este caso. De acuerdo a lo expresado por la actora, ella prestó servicios profesionales afecta a dicho cuerpo estatutario y, no al Código del Trabajo, y mucho menos a las normas de derecho público citadas en la acción, ni a la jurisprudencia administrativa de Contraloría que se señala incumplida por mi parte. No se configura ninguna de las hipótesis previstas por su artículo 420, que fija la competencia de los Juzgados de Letras del Trabajo. En subsidio contesta la demanda y señala en primer lugar que la remuneración total imponible de la actora, ascendía a \$914.118.-, mensuales. Con fecha 28 de noviembre, se le envió Carta informando que el contrato a plazo fijo terminaba el 29 de febrero de 2020. Como el actor sabe que no existe perjuicio, sólo demanda de manera genérica indemnización por lucro cesante que tasa arbitrariamente en 12 meses de remuneraciones del año 2020, sin pedir la reincorporación, porque sabe que la actora presta servicios profesionales para otro empleador, esto es, no podría ser reincorporada, porque tiene una jornada incompatible con la reincorporación, esto



es, no existe el perjuicio que demanda. Invoca el actor en la demanda, que el reconocimiento de la confianza legítima por ha sido reiterado por la Contraloría General de la República, y la jurisprudencia de la Excelentísima Corte Suprema. Sin embargo, al tratarse la Corporación Municipal demandada, una Persona Jurídica de Derecho Privado, no resultan aplicables los dictámenes de Contraloría General de la República en la materia. Así, la actora contaba con tiempo suficiente para gestionar otra oportunidad de empleo, y he tomado conocimiento que presta servicios profesionales para otro empleador desde el mes de marzo de este año, lo que acreditaremos en la oportunidad pertinente, de modo que no existe el daño, no existe el lucro cesante que demanda. Como consecuencia de todo lo anterior, solicito se rechace la demanda en todas sus partes, por carecer de todo fundamento normativo, no existe daño, no procede el pago del lucro cesante que se demanda.

TERCERO: Que la parte demandante evacua traslado conferido y se deja su resolución para definitiva.

CUARTO: Que habiéndose efectuado el correspondiente llamado a conciliación, este se da por frustrado.

QUINTO: Que se estableció por el tribunal como hechos a probar: La remuneración de la trabajadora para efectos del artículo 172 del Código del Trabajo; Efectividad de que en la especie se configuren los requisitos establecidos en el principio de confianza legítima; Efectividad de adeudarse el lucro cesante y su monto.

SEXTO: Que la parte demandante incorporó en juicio la siguiente **prueba documental:** Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2019; Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2018; Contrato de trabajo de fecha 01 de marzo de 2017; Contrato de trabajo de fecha 03 de marzo de 2016; Liquidación de remuneración correspondiente al mes de febrero de 2020; Carta de término de contrato de trabajo de fecha 28 de noviembre de 2019; Finiquito de fecha 29 de febrero de 2020. **II. prueba testimonial:** declara en estrados doña **Camila Aspeé Velásquez**, trabajo con Denisse en la escuela básica, ella era profesora. No sé desde cuando trabajaba porque cuando yo llegue ella ya estaba ahí. Estuvo hasta el 2019, porque su contrato terminó. Ella era a contrata pero no lo tengo claro, no paso a planta. La notificación nos llegó, a mí también, fue para pocos profesores. Uno de los temas que se hablaban era la baja matrícula. Yo creo que este año ocuparon su lugar y el mío pero no tengo muy claros los nombres de las



personas. Sacaron gente y algunos fueron reintegrados pero no sé quién. No sé si contrataron a alguien nuevo. **III. Exhibición de documentos:** Por incorporadas liquidaciones de remuneraciones correspondientes a los meses de enero de 2020 y diciembre de 2019.

SÉPTIMO: Que la parte denunciada incorporó en juicio la siguiente **prueba documental:** Copia de la carpeta de personal de la demandante; Liquidaciones de remuneraciones; Evaluación docente de la demandante correspondiente al año 2019.

II. Absolución de posiciones: declara doña **Denisse Muñoz Aquintui**, manifiesta que la carta de no renovación fue recibida por ella y por varios docentes más. Fui a hablar con Sergio Schik para preguntar por mi despido considerando que llevaba 4 años. Él me dijo que eso lo veía dirección de la escuela y nada porque ya estaba claro y no había posibilidad de retorno. Me dijo que se iba a ver si podía ir a otro establecimiento, me dijo que había una baja matrícula y que no sabía más. Me dijo que vería el cambio entre enero y febrero, me dio una posibilidad de colegio en Tenaun. A mí no me convenía ir a Tenaun porque yo vivo en Castro, yo quería una opción que fuera más cerca de Castro. Actualmente estoy trabajando. Yo le dije a don Sergio que Tenaun no era una opción para mí.

III.- Prueba testimonial: declara don **Sergio Schick Cifuentes**, señala que la no renovación de contrato en educación se comunica a más tardar el 30.11. Porque la carta se envía previa dotación docente y matrícula, y se le recuerda que su contrato finaliza pero no se puede anticipar a la baja matrícula o menos cursos. La dotación docente y la matrícula se tiene más o menos claro en diciembre de cada año. La baja matrícula hizo que se rebajaran los cursos. No se contrató a nadie por la señora Denisse. En total fueron cuatro profesores que no pudieron seguir en la escuela básica. En este caso, ella planteó su situación personal que debía seguir trabajando y se le ofreció ir a Tenaun, aumentando la carga horaria que tenía pero dijo que no le interesaba por la lejanía del establecimiento. La causa número uno de la no renovación es la baja matrícula. No había ninguna posibilidad de dejarla en la escuela de Dalcahue.

OCTAVO: Que respecto de la excepción de Incompetencia Absoluta del Tribunal, la demandada fundamenta esta solicitud en que la actora se encontraría sometida durante la prestación de servicios a un estatuto especial -Estatuto Docente- y por ello no resulta aplicable en su caso, el artículo 1 del Código del Trabajo, como tampoco la excepción a esta norma ya que en ese cuerpo normativo sí se regula la



forma de poner término de los contratos. Sin embargo en esta causa la actora, demanda el pago de indemnización de perjuicios por lucro cesante en base al incumplimiento del principio de confianza legítima, lo que no se contiene en el Estatuto Docente, por lo que resulta plenamente aplicable el artículo 1 en relación con el artículo 420 del Código del Trabajo y este Tribunal es competente para el conocimiento de este asunto.

NOVENO: Que en cuanto al fondo, es un hecho indiscutido que la actora prestaba servicios como docente para la Corporación de Educación de Dalcahue. Revisados todos los contratos y anexos de los mismos, es posible advertir por esta sentenciadora que la prestación de servicios se hizo, a lo menos, de manera ininterrumpida desde el 1 de marzo de 2016 al 29 de febrero de 2020, ya que posee contratos anuales con la Corporación demandada, esto sin olvidar que en caso de que los contratos a plazo fijo o contratos anuales de los docentes no contemplen los meses de verano, recibe aplicación el artículo 75 del Código del Trabajo, que establece que en estos casos, los contratos de los docentes se entienden prorrogados por ese período de tiempo, por lo que resulta acreditado en juicio que la actora prestó servicios como docente para la demandada por a lo menos 4 años, de manera ininterrumpida, mediante la suscripción de contratos anuales y sucesivos. Ahora bien, con fecha 27 de noviembre de 2019, se le da aviso a la demandante del término de su contrato por cumplimiento del periodo de tiempo por el cual fue contratada, mediante carta de aviso emitida por don Sergio Schick Cifuentes, Secretario General de la Corporación Municipal demandada, sin explicitar ni dar las razones de no renovación o prórroga del contrato para el periodo escolar siguiente.

DÉCIMO: Que conforme se señala en el dictamen N° 85700, de la Contraloría General de la República, por el cual se establece el principio de la confianza legítima, éste se hace extensivo a los funcionarios que se encuentran sometidos al Estatuto Docente, ley 19.070, por lo que para no renovar la contratación se hace necesario que se dé un aviso de a lo menos 30 días de anticipación y que dicha decisión sea fundada, no bastando en la especie que se aluda al vencimiento del plazo o que los servicios ya no sean necesarios. Para el caso de la demandante, si se cumple con la comunicación anticipada pero no así con el fundamento requerido, ya que la carta antes mencionada, no contiene fundamento fáctico. Y siendo así las cosas, existe un incumplimiento contractual en la forma de poner término a la prestación de servicios, que evidentemente genera un daño de lucro cesante que



está compuesto por las remuneraciones que dejó de percibir la docente para el año 2020, que tiene relación directa e inmediata en la carta N° 8.042, emitida por la Corporación demandada, por lo que no queda más que acoger la demanda de la forma que se expresará en la parte resolutive de este fallo.

UNDÉCIMO: Que lo razonado en el considerando anterior se ha visto reforzado y aclarado por la Contraloría General de la República, mediante la dictación del Dictamen N° 6400N18, de 3 de marzo de 2018, en que se expresa en lo pertinente lo siguiente: “...Motivación. El artículo 11 de la ley N° 19.880, dispone, en lo que interesa, que "Los hechos y fundamentos de derecho deberán siempre expresarse en aquellos actos que afectaren los derechos de los particulares, sea que los limiten, restrinjan, priven de ellos, perturben o amenacen su legítimo ejercicio". Por su parte, el artículo 41, inciso cuarto, del mismo cuerpo legal, establece que las resoluciones finales contendrán la decisión, que será fundada. Así, los actos administrativos en que se materialice la decisión de no renovar una designación, de hacerlo en condiciones diversas en los términos antes precisados, o la de poner término anticipado a ella, deberán contener “el razonamiento y la expresión de los hechos y fundamentos de derecho en que se sustenta”; por lo que no resulta suficiente para fundamentar esas determinaciones la expresión "por no ser necesarios sus servicios" u otras análogas. De conformidad con los dictámenes Nos 23.518, de 2016 y 9.317 y 11.316, ambos de 2017, todos de esta Entidad de Control, tampoco basta la mera referencia formal a los motivos invocados por la autoridad, toda vez que ello no permite conocer, de su sola lectura, cuál fue su raciocinio para arribar a tal decisión. En el mismo sentido, y tal como se señaló en el dictamen N° 11.318, de 2017, de este origen, es objetable que las decisiones antes mencionadas se fundamenten en que “se estudiarán e implementarán modificaciones en las funciones y una reestructuración en materia de personal de acuerdo a las nuevas políticas a instaurar”, puesto que ese tipo de argumentos se limitan a hacer referencia a una circunstancia futura, eventual e hipotética, sin contener los razonamientos y los antecedentes de hecho y derecho que sirven de sustento a determinaciones de esa especie. A su vez, tampoco resulta suficiente la alusión a argumentos genéricos que podrían justificar la decisión respecto de cualquier funcionario a contrata, sin explicar la adopción de la medida respecto de la persona afectada. En tal sentido, la mera referencia a “deficiencias presupuestarias del servicio” no permite conocer la razón por la que la autoridad



decidió alterar el vínculo con ese funcionario y no con el resto de los servidores que se encuentran en las mismas condiciones...” (sic).

DUODÉCIMO: Que según las liquidaciones de sueldo de la actora, su remuneración para efectos del artículo 172 del Código del trabajo asciende a la suma de \$1.319.805.-.

DÉCIMO TERCERO: Que el resto de la prueba rendida y aun cuando no ha sido expresamente señalada en los razonamientos y consideraciones de esta sentencia, también ha sido valorada en su conjunto por esta jueza conforme a las reglas de la sana crítica para arribar a convicción.

Y TENIENDO PRESENTE, además, lo dispuesto en la Ley 19.070, artículos 1, 75, 168, 177, 420, 432, 425 y siguientes del Código del Trabajo en relación a los artículos 446 y siguientes del mismo texto legal, 10 del Código Orgánico de Tribunales, 1698 del Código Civil, 160, 170 del Código de Procedimiento Civil, Dictámenes administrativos citados y demás disposiciones legales, **SE RESUELVE:**

I.- Que **SE RECHAZA** la excepción de incompetencia.

II.- Que **SE ACOGE**, con costas, la demanda de indemnización de perjuicios por lucro cesante interpuesta por doña **DENISSE LISETTE MUÑOZ AQUINTUI**, debidamente representada, en contra de la **CORPORACION MUNICIPAL DE EDUCACION Y SERVICIOS RAMON FREIRE DE DALCAHUE**, todos previamente individualizados, por lo que la demandada deberá pagar a la actora a título de indemnización por lucro cesante la suma de \$15.837.660.-.

III.- Que la suma a pagar deberá contemplar los intereses y reajustes de conformidad a lo establecido en el artículo 63 del Código del Trabajo.

Regístrese y Notifíquese.

RIT O-56-2020

RUC 20-4-0270694-6



Pronunciada por doña CAROLINA EMILIA PARDO LOBOS, Jueza Titular
del Juzgado de Letras del Trabajo de Castro.



A contar del 05 de abril de 2020, la hora visualizada corresponde al horario de invierno establecido en Chile Continental. Para la Región de Magallanes y la Antártica Chilena sumar una hora, mientras que para Chile Insular Occidental, Isla de Pascua e Isla Salas y Gómez restar dos horas. Para más información consulte <http://www.horaoficial.cl>